

FUSADES: EL ESTADO ESTÁ PERDIENDO EL CONTROL DE SEGURIDAD

EL SALVADOR

El Salvador / Judicial

El incremento de la violencia y la falta de soluciones ha incrementado el apoyo ciudadano a las actuaciones al margen de la ley, infiere FUSADES en su Informe de Coyuntura Legal. También señala que el clima de negocios empeoró por la inseguridad.

12 de Agosto de 2015 a la(s) 6:0 / Jessica Ávalos

Archivado en Estado Estado de Derecho estado pierde el control

FUSADES incremento violencia seguridad

¿En caso de atrapar a un delincuente en flagrancia usted lo entregaría indemne a las autoridades o tomaría justicia por cuenta propia? La pregunta la hizo la organización The World Justice, que elabora el Índice de Estado de Derecho, en 2014, cuando encuestó a 1,000 salvadoreños. El 56 % de los interrogados contestó que tomaría justicia por cuenta propia, y ese dato es uno de los recopilados por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en el informe de coyuntura legal que fue presentado ayer.

“Pareciera que el Estado está perdiendo el control en materia de seguridad y que la criminalidad está desbordando la capacidad del Gobierno y de las autoridades para controlarlo. Y ese es un tema muy delicado en cuanto a lo que se hablaba de que las personas no confían en las autoridades y quieran hacer justicia por sus propias manos”, dijo Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales (DEL).

No es un tema crítico, apuntó Castro, pero sí debe servir de alerta para que se fortalezca el trabajo que realizan las autoridades de Seguridad Pública y para evitar que se deteriore el Estado de Derecho en el país. “Cuando ya los ciudadanos ya no confían en sus autoridades y ya prefieren hacer uso de la fuerza directamente ellos, aparece que es nefasto para la institucionalidad y eso no debe pasar”, agregó.

El Informe de Coyuntura Legal también consigna que las tasas de homicidios han alcanzado un nivel histórico. En el primer semestre de 2015 hubo un incremento de asesinatos del 55 % respecto al mismo período de 2014, una situación que, según el estudio, ha

empeorado la percepción de los empresarios sobre el clima de inversión (ver nota secundaria).

Otro indicador

FUSADES documentó otro indicador que, cree, da señales de un deterioro al apoyo al Estado de Derecho: Latin American Public Opinion Project (LAPOP) hizo una encuesta en 2012 en El Salvador, en la cual preguntó a los ciudadanos si consideraban que las autoridades podían actuar al margen de la ley para poder capturar a un delincuente. El 40.3 % opinó que no siempre deben respetar la ley, según citó el informe.

“Vistos los niveles de inseguridad y violencia que han incrementado este nivel de tolerancia a la violación de la ley de parte del Estado se ha mantenido igual o ha aumentado”, infirió Lilliam Arrieta, coordinadora del DEL.

“Básicamente lo que nos está diciendo es que cuando la situación de inseguridad aumenta y las soluciones del Estado no llegan como se necesitan, en ese caso la gente empieza a legitimar soluciones fuera de ley, y estas pueden variar. Por ejemplo, la gente se vuelve más tolerable a que la policía violenta los procedimientos con tal de que atrapen un ladrón y al violentar esos procedimientos se pueden generar afectaciones a personas inocentes”, agregó Óscar Pineda, también investigador de Estudios Legales.

El director de la Policía ha dicho que investigan la existencia de grupos de exterminio. Hay zonas como el Bajo Lempa, en Jiquilisco, Usulután, donde se ha ventilado esa posibilidad por las coincidencias en la forma de cometer las masacres en ese lugar.

“Tolerar violaciones al Estado de Derecho a cambio de seguridad es un tema que tenemos que estar observando. El país no está en niveles críticos en cuanto a ese punto, pero es un punto que hay que estar observando pues es un tema bastante delicado”, mencionó el director de Estudios Legales.

Seis militares han sido acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de las desapariciones forzadas y privación de libertad de tres jóvenes en Armenia, Sonsonate. Los seis están siendo procesados en el Tribunal de Sentencia de ese departamento. FUSADES recordó en su estudio que los elementos de la Fuerza Armada, que realizan tareas de seguridad pública, deben apegarse al respeto de los derechos humanos y señaló que el presidente de la República, tal como lo exige la Constitución de la República, ya debió haber rendido un informe a la Asamblea sobre las actuaciones del Ejército en esta materia.

El problema en materia de seguridad, a juicio de los investigadores

de FUSADES, es que hay planes bien elaborados, entre los que mencionaron el Plan El Salvador Seguro, pero “donde fallamos es en la implementación”. Consideran, además, que los políticos únicamente hablan de buscar acuerdos para resolver el problema de inseguridad, pero nunca los concretan porque hay demasiada polarización.

Otro de los problemas graves que señalaron es la débil coordinación entre las instituciones que intervienen en materia de seguridad. Mencionaron que hace falta fortalecer la recolección de pruebas y que la Fiscalía General de la República presente investigaciones bien hechas, para evitar que los casos se desmoronen en los tribunales.

“Mucho de hablar, mucho trabajo en mesas y los índices de criminalidad están cada vez aumentando”, señaló Castro.

Administración de justicia

En el Informe de Coyuntura Legal, FUSADES volvió a mencionar la deuda de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la depuración de denuncias contra jueces. La Sección de Investigación Judicial, la que se encarga de tramitar esos casos, tenía 1,154 procesos pendientes de resolver hasta el pasado 15 de junio.

Hay 120 jueces con tres o más informativos disciplinarios abiertos en esa oficina, señaló FUSADES, lo que significa que uno de cada cinco tiene esa cantidad de denuncias en su contra por diferentes motivos. Además, según las mismas estadísticas de la CSJ, hay otros 209 jueces con un caso en investigación.

FUSADES volvió a expresar su preocupación por los ataques en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte. Cuestionaron que se haya usado fondos públicos para una campaña en contra de la sala cuando ese tribunal admitió la demanda por la aprobación de \$900 millones de deuda pública.

Y también cuestionó a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte, a la que responsabilizó de haberse “vuelto un importante cerrojo para el acceso a la información pública”, debido a que no ha resuelto ocho procesos contra resoluciones emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para la entrega de información, entre los que se incluye el caso de la entrega de información de la lista de asesores de la Asamblea Legislativa.

FUSADES también se refirió en el informe al proceso que están desarrollando los diputados para elegir a cinco nuevos magistrados de la CSJ. Consideraron que ha habido avances en la etapa de postulación de candidatos, pero creen que el atraso de más de un mes en elegir es “por aspectos que parecen estar más vinculados con las simpatías políticas de los candidatos que con

sus méritos para el cargo”.

5%

ADOREÑOS ENCUESTADOS DIJO EL
SADO A THE WORLD JUSTICE QUE
A JUSTICIA POR SU PROPIA

5%

EMPRESARIOS ENCUESTADOS DIJO
SIDO VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA EN
INDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO,
SEGUN FUSADES.

LO MÁS COMPARTIDO

Pronostican jueves
caluroso con
chubascos aislados

TSE de 2009-2014
hizo hasta 647
viajes al exterior:
FUNDE

Flechó al pequeño
Nick Jonas

**“Nos parece que se está
desbordando la capacidad
del Estado para controlar
la criminalidad, y eso es
muy delicado. Se
requieren medidas
inteligentes e integrales”.**

Javier Castro

FUSADES

**os los niveles de
ncia que han
mentado este nivel
lerancia a la
ción de la ley de
del Estado se ha
enido igual o ha
entado”.**

Lilliam Arrieta

coordinadora de Estudios Legales